

GRUPO DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE PQRS

Bogotá, D.C., 06 MAY. 2026

Señora
Sonia Enciso Quevedo
Peticionaria
sonya3oviedos@gmail.com

Asunto: Respuesta a preguntas formuladas durante la consulta de temas de interés y metodologías de diálogo para la rendición de cuentas de la ANLA 2026.

Expediente: PQRS-36212-2026

Respetada señora Sonia:

Teniendo en cuenta que el acceso a la información es uno de los elementos que componen el proceso de rendición de cuentas de las entidades públicas, nos permitimos dar respuesta a la pregunta formulada por usted en el marco de la consulta de temas de interés y metodologías de diálogo para la rendición de cuentas de la ANLA 2026, y que indica lo siguiente:

redescuentas -¿Cuáles son las normas constitucionales, legales Reglamentarias en las que se fundamenta la autoridad nacional de Licencias ambientales, a través de su oficina asesora jurídica de Licencias ambientales, para garantizar la protección de los cuerpos de Agua en el territorio nacional, y de manera específica en Puerto Gaitán, Frente a las actividades que puedan generar impactos ambientales?

Al respecto, esta Autoridad Nacional se permite señalar que la protección de los cuerpos de agua en el territorio nacional, y particularmente frente a proyectos, obras o actividades sujetos a evaluación, licenciamiento, seguimiento y control ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, se fundamenta en las siguientes normas:

En primer lugar, desde el ámbito constitucional, la actuación de las autoridades ambientales encuentra sustento en el artículo 8 de la Constitución Política, conforme al cual es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas naturales de la Nación; en el artículo 79, que reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y establece el deber estatal de proteger la diversidad e integridad del ambiente; y en el artículo 80, que impone al Estado la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, así como prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

En el plano legal, la Ley 99 de 1993 constituye una norma estructural en materia ambiental, en tanto creó el Ministerio de Ambiente, reorganizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y estableció los principios generales que orientan la política ambiental colombiana, entre ellos la prevención, la precaución, el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales renovables, dentro de los cuales se encuentran las aguas superficiales y subterráneas, los cauces, rondas hídricas, nacimientos, humedales, quebradas, ríos, caños y demás componentes del sistema hídrico.

Visto lo anterior, mediante el artículo 2 del Decreto 3573 de 2011, se establece que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es la entidad encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental vigente, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país. Así mismo, el artículo 3 ibidem asigna a esta Autoridad Nacional las funciones relacionadas con el otorgamiento o negación de licencias, permisos y trámites ambientales de su competencia, así como el seguimiento, control y adopción de las actuaciones administrativas que correspondan frente a los instrumentos de manejo y control ambiental.

En este sentido, el artículo 2.2.2.3.2.2 del Decreto 1076 de 2015 lista los proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entre ellos aquellos asociados a los sectores de hidrocarburos, minería, infraestructura, energía, plaguicidas y agroquímicos, entre otros. Lo anterior constituye la esencia funcional para la cual fue creada esta Autoridad Nacional, esto es, evaluar ambientalmente aquellos proyectos que, por su naturaleza, magnitud o potencialidad de impacto, requieren un control especializado del orden nacional.

Ahora bien, en relación con la protección de los cuerpos de agua, debe precisarse que la evaluación que adelanta la ANLA no se efectúa de manera abstracta o general, sino en función de los impactos ambientales que el proyecto, obra o actividad objeto de evaluación pueda generar sobre los recursos naturales ubicados dentro de su área de influencia. En consecuencia, cuando dentro del área de influencia de un proyecto se identifica la presencia de fuentes hídricas, tales como ríos, quebradas, caños, humedales, nacimientos, drenajes, cuerpos de agua superficiales o aguas subterráneas, el análisis técnico y jurídico se encamina a determinar la posible afectación que las actividades proyectadas pueden generar sobre dichos componentes hídricos.

Así, la evaluación ambiental comprende, entre otros aspectos, la identificación y caracterización de las fuentes hídricas presentes en el área de influencia del proyecto; el análisis de la línea base ambiental; la valoración de los impactos ambientales directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos que puedan generarse sobre el recurso hídrico; la revisión de las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación propuestas por el solicitante; y, cuando resulte procedente, la imposición de obligaciones específicas orientadas a garantizar la protección de dichas fuentes.

En ese orden de ideas, todo lo que se estudia dentro del trámite ambiental se encuentra directamente relacionado con los impactos que puede generar el proyecto evaluado frente a

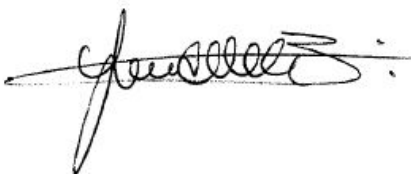
las fuentes hídricas localizadas en su área de influencia. Por tanto, la protección de los cuerpos de agua se materializa a través de la evaluación previa de los impactos, la imposición de medidas de manejo ambiental, el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el instrumento ambiental y, de ser necesario, la adopción de medidas preventivas o sancionatorias cuando se evidencie incumplimiento de la normativa ambiental aplicable y de la licencia ambiental otorgada.

Para el caso específico del municipio de Puerto Gaitán, Meta, la ANLA ejerce sus competencias respecto de los proyectos, obras o actividades que, de conformidad con el artículo 2.2.2.3.2.2 del Decreto 1076 de 2015, correspondan a la competencia privativa del orden nacional. En tal sentido, si un proyecto localizado en dicho municipio pertenece a alguno de los sectores o actividades listadas en la norma y puede generar impactos sobre cuerpos de agua presentes en su área de influencia, tales impactos deberán ser evaluados dentro del respectivo trámite ambiental, con el fin de determinar la viabilidad ambiental del proyecto y las medidas necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar las posibles afectaciones al recurso hídrico.]

Ahora bien, es de señalar que las preguntas a las que no se les da respuesta por este medio puede que hayan sido trasladadas a otra entidad al no ser competencia de esta Autoridad o que hayan sido priorizadas para ser respondidas el día de los espacios de diálogo de rendición de cuentas de la ANLA directamente.

A razón de lo anterior, le invitamos a estar al tanto de nuestros canales oficiales (<https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/canales-de-atencion>) y redes sociales (<https://www.facebook.com/ANLACol/> y https://twitter.com/ANLA_Col), a través de las cuales se dará a conocer más información sobre estos eventos.

Cordialmente,



JUAN CARLOS MENDEZ BELTRAN
COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE PQRSD

Elaboró:
MARIANA GOMEZ GIRALDO (CONTRATISTA)

Revisó:
ANDRES DAVID CAMACHO MARROQUIN (CONTRATISTA)

Copia para:

Medio de Envío: Correo Electrónico

Archívese en: 202623001400000003E

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.